

# EL PAGO ÚNICO DE LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO. PUNTOS CRÍTICOS

1. Introducción. 2. Sujetos Beneficiarios. 3. Determinación del momento de inicio de la actividad profesional. 4. Los límites de la capitalización. 5. El control del destino de la prestación capitalizada.

*Carmen Viqueira Pérez*

PROFESORA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA S.S.

*Fernando Ballester Laguna*

PROFESOR DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA S.S.

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

## 1. INTRODUCCIÓN

Como se sabe, la prestación por desempleo se puede percibir en pagos mensuales o, en determinados supuestos y bajo ciertas condiciones, mediante un único pago. Esta posibilidad de que la prestación se abone de una sola vez se contempla en el art. 228.3 TRLGSS y se desarrolla en el Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio<sup>1</sup>, configurándose, en uno y otro texto, el pago único de la prestación como una medida de fomento del empleo<sup>2</sup>. Ello hace que, como se verá más adelante, nos encontremos ante una prestación que encierra una doble naturaleza: a su evidente naturaleza de prestación de seguridad social se suma esa otra de medida de fomento del empleo. En nuestra opinión, es precisamente su naturaleza mixta la razón última de algunos de los problemas interpretativos que se suscitan en torno a esta modalidad de pago de la prestación. Sobre ellos se reflexiona en las páginas que siguen.

## 2. SUJETOS BENEFICIARIOS

Como ya se ha señalado, la prestación por desempleo en su modalidad de pago único une a su naturaleza prestacional la de medida de fomento al empleo. Un primer acercamiento a la norma pone ya de manifiesto cómo esta finalidad de

1 Por el que se regula "el abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único por el valor actual de su importe, como medida de fomento de empleo" (BOE de 2 de julio).

2 En efecto, el art. 228.3 TRLGSS dispone que "Cuando así lo establezca algún programa de fomento de empleo, la entidad gestora podrá abonar de una sola vez el valor actual del importe de la prestación...". Por su parte, el Real Decreto 1044/1985 ya hace referencia en su propio título al "abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único por el valor actual de su importe, como medida de fomento de empleo".

fomento del empleo se concreta en la promoción del autoempleo como vía de salida a una situación de desempleo subsidiado. En efecto, ya en su artículo 1, el Real Decreto 1044/1985 señala como titulares del derecho a percibir la prestación capitalizada a quienes vayan a realizar una actividad profesional mediante una concreta fórmula de autoempleo: como socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado o sociedades laborales. En este contexto, llama la atención el hecho de que el Real Decreto no haga referencia al trabajo autónomo que, como se sabe, representa la manifestación más típica del autoempleo.

Originariamente la norma contemplaba la posibilidad de capitalizar la prestación con el fin de realizar una actividad profesional por cuenta propia. Este derecho a capitalizar la prestación para establecerse como autónomo se suprime en la Ley 22/1992<sup>3</sup>, cuyo Preámbulo es claro al señalar que esta supresión, al igual que sucede con otras medidas contempladas, obedece a la necesidad de *“racionalizar el gasto en protección por desempleo (...), actuando sobre las principales causas que han originado un importante incremento en el coste de la protección”*<sup>4</sup>. Ello no obstante, en la actualidad esta limitación no opera con respecto a los desempleados minusválidos, quienes, a raíz de lo establecido en el artículo 31 de la Ley 50/1998<sup>5</sup>, pueden capitalizar la prestación para realizar una actividad profesional no sólo como trabajador de una empresa de economía social sino también como trabajador autónomo.

62 En efecto, el artículo 31 de la Ley 50/1998 amplía la capitalización de la prestación por desempleo en relación con el trabajo autónomo de los minusválidos, señalando que la posibilidad de capitalización alcanza a *“los trabajadores minusválidos que se conviertan en trabajadores autónomos”*. La escueta dicción del precepto plantea ya de entrada la necesidad de delimitar qué ha de entenderse por *“trabajadores minusválidos”*. Y dado que, como es conocido, no existe en nuestro derecho un concepto unívoco de trabajador minusválido, es necesario determinar cual es el alcance que deba entenderse que tiene esta expresión en este caso.

En nuestra opinión, dos son las referencias normativas que ofrecen criterios delimitativos a tal efecto. Por una parte, parece que ha de tenerse en cuenta la definición de trabajador minusválido que baraja la normativa reguladora de la relación laboral especial de trabajadores minusválidos en centros especiales de

3 De 30 de julio, de Medidas Urgentes sobre Fomento al Empleo y Protección por Desempleo (BOE de 4 de agosto, núm. 186). Esta Ley trae causa del Real Decreto-Ley 1/1992, de 3 de abril (BOE de 7 de abril, núm. 84).

4 Para el profesor ESCUDERO ello *“guarda relación, en última instancia, con el importante (aunque indeterminado) volumen de fraude producido en el destino dado por quienes, teóricamente, se habían establecido como trabajadores autónomos a las cantidades percibidas en concepto de pago único de la prestación contributiva por desempleo”*. “El Decreto-Ley 1/1992. Significación general en materia de protección por desempleo y valoración final de la norma (III)”, *Relaciones Laborales*, La Ley, Tomo II, 1992, pág. 1166].

5 De 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (BOE de 31 de diciembre, núm. 313).

empleo<sup>6</sup>, en cuyo artículo 2 se señala que trabajador minusválido es aquella persona que tenga reconocida *“una minusvalía en grado igual o superior al 33% y, como consecuencia de ello, una disminución de su capacidad de trabajo al menos igual o superior a dicho porcentaje”*. Por otra parte, es preciso tener especialmente presente el concepto de trabajador incapaz o inválido que se baraja en los artículos 137 y siguientes del TRLGSS: en efecto, habida cuenta de que se trata aquí, al fin y a la postre, de delimitar el ámbito subjetivo de una prestación de seguridad social -la del desempleo- parece claro que habrán de tenerse en cuenta los parámetros que en este sentido baraja la normativa de seguridad social. Parece, por ello, que la “minusvalía” ha de venir definida por equivalencia a la “incapacidad” a que se refiere el TRLGSS. Y si se conviene que ello es así, habrá de convenirse también que el trabajador minusválido es aquel trabajador que tiene disminuida su capacidad al menos en un 33%.

A la vista de los datos señalados puede concluirse, desde nuestro punto de vista, que trabajador minusválido es aquel que tiene afectada su capacidad de trabajo al menos en un 33%. Por lo demás, ha de señalarse que el hecho de que la norma permita que sólo estos trabajadores minusválidos puedan capitalizar la prestación para autoemplearse como trabajadores por cuenta propia, constituye una medida de acción afirmativa de objetivos en tanto en cuanto se trata de una medida de carácter promocional, no imperativa.

En otro orden de ideas, es preciso señalar que, como es lógico pensar, para proceder al pago único de la prestación la norma exige la acreditación de que en efecto se va a articular alguna de las medidas de autoempleo en ella previstas; esto es, se exige acreditar que se va a crear una cooperativa de trabajo asociado o sociedad laboral, o bien que el trabajador va a formar parte de una sociedad ya creada. Si se trata de la constitución *ex novo* de una sociedad, es preciso aportar el proyecto de estatutos de la misma; en el caso de que el trabajador se incorpore como socio deberá acompañar certificación de haber solicitado su ingreso. En uno y otro caso, el abono de la prestación se condiciona a la acreditación, bien de que la sociedad ha sido inscrita en el correspondiente registro, bien de que el trabajador ha sido admitido como socio (artículo 3).

Nada dice la norma acerca de la acreditación que quepa exigir en relación con el trabajo por cuenta propia que puedan desarrollar los minusválidos; aunque no cabe duda de que también en este caso el beneficiario habrá de demostrar que, en efecto, va a poner en marcha ese proyecto de autoempleo. Cuando este proyecto consista en la creación o incorporación a una sociedad es evidente que serán exigibles análogos requisitos a los anteriormente enumerados; para los restantes supuestos, parece claro que tal acreditación girará en torno a la afiliación y alta en el régimen de autónomos y en el impuesto de actividades económicas.

6 Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio (BOE de 8 de agosto).

Finalmente, conviene hacer notar que para proceder al abono de la prestación la norma no exige sólo que se acredite la articulación de la medida de autoempleo; ello, con ser premisa necesaria, no es condición suficiente: se exige, además, que este proyecto de autoempleo tenga visos de continuidad, de cierto éxito. Dicho de otro modo, es necesario que se trate de un proyecto viable<sup>7</sup>.

### 3. DETERMINACIÓN DEL MOMENTO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL.

Según señala el artículo 4 una vez percibida la prestación el trabajador deberá iniciar la actividad en el plazo máximo de un mes. La literalidad del precepto parece conducir a la idea de que la iniciación de la actividad ha de producirse necesariamente con posterioridad al abono de la prestación capitalizada. Interpretación esta que podría entenderse también avalada por la dicción de los artículos 1 y 3, que se refieren en términos “de futuro” al desempeño de la actividad profesional<sup>8</sup>. Sin embargo, esta conclusión, pudiendo ser fiel a la letra de la norma, en nuestra opinión, no resulta coherente con la finalidad de la misma. Veamos.

Entender que la iniciación de la actividad sólo puede producirse con posterioridad al abono de la prestación implica someter al trabajador a un período de inactividad forzoso desde el momento en que pierde el trabajo que origina la prestación hasta el momento en que el INEM procede al pago único. Ello, desde luego, podría tener sentido si esa situación de inactividad del trabajador fuera exigencia ineludible para la percepción de la prestación, pero no en otro caso.

Puede considerarse que la situación de inactividad del trabajador tiene ese carácter de exigencia ineludible, indudablemente, cuando se trata de la prestación que se abona por mensualidades, porque esta prestación es en puridad una prestación sustitutiva de las rentas salariales y que, por ello, se abona en tanto en cuanto el trabajador carezca de trabajo y de salario. Pero el asunto es distinto cuando se

7 Qué sea un proyecto viable es cuestión sobre la que la ley no se pronuncia. Ello no obstante, parece claro que la viabilidad de un proyecto remite a la idea de una cierta perspectiva de futuro en el plano económico. Un análisis de la jurisprudencia evidencia que los casos en que se pone en duda la viabilidad del proyecto son supuestos en los que el trabajador pretende el desarrollo de una actividad profesional que ya se ha intentado realizar con anterioridad al amparo de otra empresa, siendo los socios, infraestructura, y en ocasiones incluso la ubicación esencialmente los mismos (véase al respecto la S.TSJ de Extremadura, de 9 de enero de 1997 -AS.588-, FD 31). Ciertamente, no parece descabellado poner en duda la viabilidad del proyecto cuando concurren tales circunstancias. Y precisamente por esto puede parecer razonable, desde algún punto de vista, exigir la presencia de algún nuevo dato (la ampliación de su objeto social, por ejemplo) que permita presumir que no va a producirse un nuevo fracaso. Ello no obstante ha de tenerse en cuenta también que pese a la identidad de circunstancias el proyecto puede correr una mejor suerte.

8 El artículo 1 condiciona el pago único al hecho de que los trabajadores acrediten “que van a realizar una actividad profesional”. Por su parte, el artículo 3, exige que se acompañe a la solicitud “memoria explicativa sobre el proyecto de inversión a realizar y actividad a desarrollar, así como documentación que acredite la viabilidad del proyecto”.

trata de una prestación capitalizada. Lo que se pretende con ella no es sustituir la ausencia de rentas salariales, sino fomentar el autoempleo del desempleado; dicho de otro modo: evitar la situación de inactividad del trabajador desempleado. Y si se conviene que esto es así, habrá de concluirse que no es coherente entender que la norma exige que la actividad sólo puede comenzarse una vez percibida la prestación.

Cómo entender entonces ese plazo de un mes a que se refiere el artículo 4. A nuestro juicio, lo que el precepto está señalando es el término final del tiempo en que puede producirse el inicio de la actividad: esto es, lo que la norma indica es que, a lo más tardar, la actividad ha de comenzarse dentro de ese mes. De modo que la norma no impediría que el desarrollo de la actividad tuviera lugar en un momento anterior al abono de la prestación capitalizada, a su reconocimiento, o incluso a su solicitud misma<sup>9</sup>.

En efecto, en nuestra opinión, el hecho de que el trabajador haya comenzado a desarrollar la actividad profesional a la que se va a afectar la prestación capitalizada no debe incidir en la dinámica de su reconocimiento, que depende del control de otros elementos (que son los mismos con independencia del momento del inicio de la actividad): la viabilidad del proyecto, que el trabajador debe acreditar para poder percibir la prestación capitalizada; y la afectación del pago único a la actividad a desarrollar, cuyo incumplimiento determina su consideración como pago indebido. Esta es una cuestión que ya se ha planteado en la jurisprudencia, que maneja en este sentido un argumento poco discutible: que *“no se puede esgrimir como causa denegatoria de la prestación (...) la realización, precisamente, del trabajo que la justifica”*<sup>10</sup>.

Ello no obstante, la prestación capitalizada puede ser denegada cuando no concurren los requisitos legales para su concesión. Y si el pago único es denegado, el trabajador se verá en una situación distinta según haya iniciado o no la actividad en cuestión. Si la actividad no se ha iniciado, la denegación de la capitalización no tiene más efecto que abrir la vía de percibir la prestación por mensualidades. Por el contrario, si la denegación se produce cuando el trabajador se encuentra ya desarrollando esa actividad, el asunto es distinto. Y es que, en tal caso, el trabajador puede ver perjudicado el derecho a percibir la prestación por mensualidades en tanto en cuanto se trata de una persona empleada. Sin embargo, a nuestro juicio es posible minimizar esos efectos. Veamos.

9 Determinada jurisprudencia distingue a estos efectos entre el inicio de la actividad y los actos preparatorios de la misma, entendiendo por estos últimos gestiones tales como el otorgamiento de la escritura constitutiva de la sociedad, su calificación o registro. Una lectura de estos pronunciamientos pone de manifiesto que se trata de una diferenciación artificial que tiene por objeto soslayar la problemática que suscita el inicio de la actividad con anterioridad al abono de la prestación. [Así, las SS.TSJ de Castilla-La Mancha, de 22 de enero de 1998 (AS 5123), FD 21; de Castilla-León/Valladolid, de 16 de octubre de 1998 (AS 4802), FD 21].

10 SS.TSJ de Andalucía/Sevilla, de 9 de junio de 1994 (AS 2393), FD Unico; de Castilla-León/Valladolid, de 16 de octubre de 1998 (AS 4902), FD 21.

Si bien se mira, este supuesto es equiparable a aquel otro en el que el trabajador encuentra un empleo en el transcurso del tiempo que media entre la solicitud y el reconocimiento de la prestación por mensualidades. En tales casos, procede aplicar el régimen establecido en los artículos 210.3 y 212.1.d TRLGSS; dicho de otra manera: lo que procede es operar como si se hubiera accedido al empleo una vez reconocida la prestación y, por tanto, se producirá la suspensión o extinción del derecho a la percepción de la prestación. De modo tal que también aquí el trabajador vería suspendido o extinguido su derecho según el tiempo que dure el desarrollo de su actividad.

#### 4. LOS LÍMITES DE LA CAPITALIZACIÓN

La posibilidad de capitalizar la prestación se prevé únicamente respecto a las prestaciones por desempleo total del nivel contributivo (artículo 1). El hecho de que se circunscriba esta posibilidad a las prestaciones del nivel contributivo se explica desde la idea de que la capitalización resultaría incompatible con la esencia del subsidio: parece claro que el subsidio (sea cual sea su tipo) tiene por objeto atender a las necesidades vitales o básicas del desempleado, y que, siendo ello así, no resulta coherente poder obtener dicha prestación capitalizada que, por definición, habrá de destinarse íntegramente al desarrollo de la actividad profesional.

66

A motivos distintos obedece el hecho de que la capitalización pueda operar únicamente en las prestaciones por desempleo total: esto es, a las situaciones de desempleo que derivan de la extinción del contrato de trabajo. Y es que, por definición, ni la situación de desempleo total temporal (que deriva de la suspensión del contrato por expediente de regulación de empleo), ni la situación de desempleo parcial (que trae su causa de la reducción de jornada)<sup>11</sup> conllevan la pérdida del puesto de trabajo, por lo que no tiene sentido plantearse la creación de un nuevo empleo a través de la capitalización.

Es claro que la capitalización, pues, viene referida sólo a la prestación por desempleo total definitivo. Una primera lectura de la norma conduce a la idea de que la capitalización opera para la creación de un puesto de trabajo que venga a sustituir el (único) que antes se tenía. Y ello indudablemente es así, pero conviene puntualizar que también es así, en nuestra opinión, cuando se trata de un trabajador pluriempleado que pierde uno de sus trabajos. En efecto, a nuestro juicio, no existe en la norma dato alguno que obligue a restringir los supuestos de capi-

11 En efecto, la nueva redacción del artículo 203.3 TRLGSS no deja margen a la duda: *"El desempleo será parcial cuando el trabajador vea reducida temporalmente su jornada ordinaria de trabajo, al menos en una tercera parte, siempre que el salario sea objeto de análoga reducción."*

*A estos efectos, se entenderá por reducción temporal de la jornada ordinaria aquella que se autorice por un período de regulación de empleo, sin que estén comprendidas las reducciones de jornada definitivas o que se extiendan a todo el período que resta de la vigencia del contrato de trabajo".*

talización a aquellos casos en los que el trabajo que se pierde sea el único del que se dispone. Y es que, en nuestra opinión, del mismo modo que es compatible el desarrollo de determinados trabajos con la percepción de la prestación por mensualidades, resulta también compatible la realización de esos mismos trabajos con la percepción de la prestación capitalizada.

Sentado ya qué tipo de prestación se puede capitalizar, resta ahora analizar en qué cuantía. Del tenor literal de la norma se deduce con claridad que se puede capitalizar la totalidad de la prestación reconocida (artículo 2). En este caso, la norma señala además que la prestación se tendrá por extinguida por la causa prevista en el artículo 213.1 a TRLGSS: esto es, por agotamiento del plazo de duración de la prestación<sup>12</sup>. Consecuente con esta ficción, la norma añade que no podrá reconocerse un nuevo derecho a la prestación por desempleo hasta que no transcurra el período de tiempo durante el cual se hubiera extendido su percepción por mensualidades<sup>13</sup>.

Por otra parte, con la misma claridad se desprende de la dicción del artículo 2 la posibilidad de capitalizar la totalidad de las mensualidades que restan por percibir de la prestación. En efecto, el derecho a capitalizar se condiciona al hecho de que los trabajadores *“tuvieran pendientes de percibir (...) parte de las mensualidades que en derecho les correspondan”*. La única limitación que en este sentido se establece es que al menos resten por percibir tres mensualidades.

Ahora bien, lo que no parece posible, a tenor de la literalidad de la norma, es capitalizar tan sólo una parte de las mensualidades de la prestación, lo cual plantea problemas en el supuesto de que el trabajador no precise invertir la totalidad de aquélla. Veamos.

Como es sabido, es preciso afectar todo lo capitalizado a la actividad profesional proyectada, apreciándose en caso contrario la existencia de pago indebido (artículo 7.1). Si la inversión requerida para ello iguala o supera el importe de la prestación a percibir (ya sea toda o la parte restante) no se plantea problema alguno ya que la cuantía capitalizada será “absorbida” en su totalidad por la demanda de inversión. Pero si la inversión necesaria es de cuantía menor que la totalidad de la prestación o la parte que quede por percibir de ella, siguiendo la literalidad de la norma el trabajador se vería obligado a “consumir” parte de la prestación por mensualidades hasta hacer coincidir la cantidad capitalizada con la cantidad que necesita invertir. Dicho de otro modo, el trabajador se vería en la obligación de posponer la capitalización y, muy frecuentemente también, la actividad profesional que la sustenta hasta que la cuantía a invertir y la cuantía a percibir sean iguales. Esta consecuencia resulta poco compatible con la finalidad de fomento

12 En verdad, la literalidad de la norma se refiere al art. 11 a de la Ley 31/1984, que se ha convertido en el actual art. 213.1 a TRLGSS.

13 La norma se refiere a la prestación por desempleo. Lo que no excluye el subsidio en aquellos casos en los que concurra la situación de necesidad que justifica su reconocimiento.

al empleo que sustenta la norma. En nuestra opinión, más razonable sería que el trabajador pudiera solicitar *ab initio* la capitalización de la parte de prestación que necesita. Ello, claro está, plantearía a su vez el problema de determinar qué suerte habría de seguir el resto de prestación no capitalizada.

Parece que ha de descartarse, ya de entrada, la posibilidad de que pueda ser percibida sin más por mensualidades, por la sencilla razón de que una vez iniciada la actividad profesional el trabajador ya no se encuentra desempleado. Si bien se mira, el supuesto que ahora nos ocupa, es en esencia análogo al que sustenta la dinámica de suspensión o extinción de la prestación por mensualidades como consecuencia de la realización de trabajos por parte del desempleado (artículos 210.3 y 212.1 d TRLGSS). Así las cosas, en nuestra opinión, es aplicable a este supuesto la solución que allí se articula. Si el desarrollo de la actividad supera los 12 meses se produce la extinción del derecho, debiendo optar el interesado entre reabrir el derecho inicial o percibir la nueva prestación que en su caso hubiera generado<sup>14</sup>. Si el desarrollo de la actividad no supera los 12 meses, se produce la suspensión del derecho pudiendo percibir el trabajador la parte que le restaba. En conclusión, a través de la vía propuesta, o de otra distinta, es necesario articular el mecanismo que permita, por una parte, capitalizar la cuantía de prestación que se necesita invertir y, por otro, poder conservar en determinados casos el derecho a percibir la cuantía no consumida.

## 5. EL CONTROL DEL DESTINO DE LA PRESTACIÓN CAPITALIZADA

Para concluir, es preciso efectuar siquiera una breve referencia a un asunto de notoria importancia: el control de la afectación de la prestación capitalizada. Como ya se ha dicho, es preciso afectar todo lo capitalizado a la actividad profesional proyectada, apreciándose, en caso contrario, la existencia de pago indebido (artículo 7). Es evidente que la afectación es elemento estructural de la finalidad perseguida por la norma: se permite la capitalización en tanto en cuanto se destina a alguno de los tipos de autoempleo permitidos por la norma. Precisamente por ello, sorprende que la norma no sea coherente con este planteamiento descuidando los mecanismos de control del destino de la prestación capitalizada.

14 El hecho de que se haya generado una nueva prestación depende de dos parámetros: del tiempo trabajado y del tipo de trabajo realizado. Con respecto al tiempo trabajado es preciso que se hayan acumulado cotizaciones suficientes para generar el nuevo derecho; con respecto al tipo de trabajo, en atención a la letra de la ley, es preciso haber desarrollado un tipo trabajo que genere cotizaciones computables. En este sentido, la jurisprudencia unificada ha matizado la interpretación de la norma entendiendo que la realización de trabajos que no generan una nueva prestación es una laguna legal que debe ser resuelta reconociendo *"a los desempleados que han realizado un trabajo por cuenta propia entre dos periodos de desempleo el derecho a reanudar la percepción de la prestación no consumida hasta el agotamiento de ésta"* [S.TS. -ud- 18 de marzo de 1998 (Ar.3.000); en el mismo sentido, también en unificación, TS. 18 de marzo de 1998 (Ar.3252); TS 24 de marzo de 1998 (Ar.3010) y TS de 24 de junio de 1998 (Ar.5528)].



Ciertamente, el artículo 4 exige al trabajador que acredite en el plazo máximo de un mes a contar desde la percepción de la prestación que ha iniciado la actividad profesional en cuestión o que “*está en fase de iniciación*”<sup>15</sup>. Y, por su parte, el artículo 7 establece una presunción *iuris tantum* de no afectación cuando no se haya acreditado alguno de los anteriores extremos en el plazo establecido. Una lectura atenta de ambos preceptos viene a poner de manifiesto que basta con acreditar que se está en fase de iniciación de la actividad para entender cumplido el mandato normativo. Ello, como control de afectación en un momento inicial, parece razonable, porque con toda probabilidad habrá actividades que requieran un plazo superior para iniciarse. Ahora bien, lo que en absoluto parece de recibo es que éste sea todo el control de afectación que la norma contiene. En nuestra opinión, no se explica cómo la norma no establece la obligación de acreditar en un momento posterior -el que se considere oportuno- que en efecto la actividad se ha iniciado. En este sentido, no es preciso decir que nos parece absolutamente necesario intensificar los mecanismos de control que permitan verificar el destino dado a la prestación capitalizada.

15 Recuérdese que si ya se ha iniciado *ante tempus* la actividad profesional no será necesario acreditar este extremo con posterioridad al percibo de la prestación capitalizada, pues ya se hizo antes.